

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020)

SENTENCIA

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **ROBERTO DE JESÚS MONSALVE LOAIZA**
Demandadas : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.**
Radicado : **05-001-31-05-015-2015-00440-02**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, contradicción del dictamen médico laboral -.
Decisión : Confirma Sentencia absolutoria de Primera Instancia
Sentencia No : 190

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se declare la **nulidad de los dictámenes médico laborales** emitidos por las entidades demandadas, solo en lo referente al porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de la invalidez, que **el demandante presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común** y fecha de estructuración de la invalidez sustentada en la historia clínica; se **condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar pensión de invalidez de origen común**, en forma retroactiva, mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el demandante nació el día **26 de mayo de 1946**, fue evaluado por Medicina Laboral de COLPENSIONES el 13 de septiembre de 2013, siendo calificado con el **24.83%** de pérdida de capacidad laboral de origen común y fecha de estructuración el 1º de marzo de 2013, la Junta Regional de Calificación de Invalidez lo calificó el 28 de febrero de 2014 con el **39.70%** de pérdida de capacidad laboral de origen común y fecha de estructuración el 1º de marzo de 2013, lo cual fue confirmado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 4 de diciembre de 2014; reclamó pensión de invalidez el 7 de enero de 2015 sin haber obtenido respuesta.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES aceptó como cierto lo referente a la afiliación del demandante y las calificaciones de pérdida de capacidad laboral efectuadas; frente a los demás hechos expuso que no son ciertos o no le constan, indicando que la entidad puede negar la pensión de invalidez, por cuanto el demandante no tiene el 50% de

pérdida de capacidad laboral. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de indexación, compensación y pago, innominada, buena fe (folios 41 a 44).

Por su parte, la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** aceptó las calificaciones efectuadas al demandante, frente a los demás hechos expuso que no son ciertos o no le constan y se opuso a las pretensiones, formulando las excepciones denominadas validez del dictamen ajustado al manual único de calificación de invalidez, inexistencia de la obligación, buena fe, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar, el estado clínico del paciente pudo variar después del dictamen emitido por la Junta y explica que la calificación estuvo soportada en la historia clínica a esa fecha y la valoración de los especialistas; **siendo posible que las condiciones del paciente hayan empeorado después de haberse emitido el dictamen, pudiendo aparecer nuevas deficiencias debido a la degeneración de las enfermedades, que no existieron en su momento y que tampoco estuvieron soportadas por conceptos de especialistas, por lo que, a este tiempo, un nuevo dictamen, realizado por las Juntas o por otra institución, puede arrojar una pérdida de capacidad laboral mayor al 39.70% concedido inicialmente, sin que se le pueda endilgar responsabilidad a la entidad**, toda vez que actuó bajo los parámetros legales y de buena fe, basada en la situación actual del paciente, sin prever condiciones futuras que se pueden valorar en una nueva calificación; anotando que una nueva valoración con una historia clínica reciente, estaría fuera del contexto con que en su momento calificó la Junta (folios 59 a 65).

A su vez, la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** aceptó la afiliación del demandante y las calificaciones efectuadas; se opuso a las pretensiones de la demanda, formulando como excepciones la legalidad del dictamen, inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen, buena fe, la variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen lo que exime de responsabilidad a la entidad, anotando que es absolutamente factible que se

presenten detrimentos en la condición clínica del paciente o que surjan nuevas deficiencias que no existían o no eran susceptibles de ser valoradas cuando se dictaminó el caso, sin que ello implique que la Junta haya errado al dictaminar una pérdida de capacidad laboral del 39.70% y que los cambios eventuales de salud, deben ser evaluados en una nueva calificación; expone que con el transcurso del tiempo la condición del paciente puede variar y derivar en una enfermedad con mayores complicaciones fisiológicas o generarse nuevos diagnósticos, como al parecer sucede en este caso; agrega que la simple diferencia temporal exonera de cualquier cargo a la Junta, en caso de determinarse un detrimento en la condición del paciente con una nueva prueba pericial o calificación (folios 71 a 88).

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín**, declaró que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por las entidades demandadas, son válidos, toda vez que se realizaron de conformidad con los fundamentos fácticos y legales procedentes; **declaró que el señor Roberto de Jesús Monsalve Loaiza no cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez**, al tener un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al 50%; **absolvió a las entidades demandadas de todas las pretensiones invocadas**; condenó en **costas** al demandante, fijando como agencias en derecho la suma de **\$2.484.348** representada en un SMLMV del año 2019 equivalente a **\$828.116**, para cada una de las entidades demandadas.

Consideraciones del Juzgado: Indicó en términos generales, que **el actor no explicó por qué los dictámenes demandados carecen de validez**, en los cuales **no evidenció algún yerro que implique su nulidad**, pues se tuvieron en cuenta todas las historias clínicas y exámenes paraclínicos; expuso que **el dictamen practicado en el trámite del proceso, realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia**, si bien calificó al demandante con el **53.41% de pérdida de capacidad laboral**, no le ofreció mayor seguridad o

suficiente claridad a la Judicatura, pues obran en el expediente tres dictámenes que arrojan un porcentaje inferior al 50% y que al compararse los cuatro dictámenes, solo el de la U de A agregó otras deficiencias como la de rodilla, que no fueron calificadas por la Junta Nacional, ni por la Junta Regional, ni por Colpensiones, resultando extraño que la Facultad Nacional de Salud Pública haya encontrado estas deficiencias ignoradas por las otras entidades; no encontró claridad sobre la fecha en que inició la patología que presenta el actor por rodilla, entendiendo que la Facultad Nacional de Salud Pública estructuró la pérdida de capacidad el 1° de marzo de 2013, fecha para la cual aún no había aparecido esa deficiencia, lo cual explica que las entidades demandadas no lo hubiesen tenido en cuenta en ese momento.

Recurso de Apelación apoderada del demandante:

El Juzgado en la motivación de la Sentencia expuso que **hubo algunas enfermedades que no fueron tenidas en cuenta por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; tampoco se tuvo en cuenta una deficiencia de la rodilla que el demandante viene manifestando**, en el dictamen de la Facultad Nacional de Salud Pública se indica que viene con una deficiencia de rodilla desde hace aproximadamente doce meses; **los dictámenes que se están debatiendo son del año 2014 y el practicado en el proceso es del 8 de junio de 2018, por lo que el demandante no mejora, obviamente por su edad, presenta una pérdida de capacidad común y el dictamen especifica que por más terapias a las que se someta, es una enfermedad progresiva y nunca tendrá mejoría**, ni siquiera en reposo o con terapias; sostiene que no se tuvo en cuenta las dificultades presentadas en forma posterior a los dictámenes realizados por las Juntas demandadas.

Alegatos de conclusión:

La apoderada de **COLPENSIONES** afirma que el demandante no cumple con los requisitos estipulados en la Ley para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, ya que está demostrado de acuerdo al material probatorio, que no cuenta con el 50% de pérdida de capacidad laboral tal y como consta en los tres dictámenes

obrantes en el expediente; tampoco cumple con el requisito de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años; no siendo procedentes los intereses moratorios, por cuanto lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Solicita se confirme la decisión de instancia y se condene en costas a la parte demandante.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación; de conformidad con lo establecido de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en determinar si es procedente revocar la Sentencia absolutoria de Primera Instancia, analizándose la idoneidad del dictamen médico pericial practicado en el trámite del proceso, para determinar la invalidez del demandante, teniéndose en cuenta patologías o diagnósticos surgidos con posterioridad a los dictámenes emitidos por las entidades demandadas.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo **142 del Decreto 19 de 2012**, establece que corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -**COLPENSIONES**-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, **a las Compañías de Seguros** que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las **Entidades Promotoras de Salud EPS**, **determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose controvertir ante las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional y nacional**; indicando expresamente que **contra dichas decisiones, proceden las acciones legales.**

Respecto al tema de la **contradicción del dictamen de pérdida de capacidad laboral**, la **Sala de Casación Laboral de la H. CSJ**, en **Sentencia SL1044-2019 Radicación 68074 M.P. doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo**, reiterando CSJ SL16374-2015 y CSJ SL5280-2018, **indicó que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez no es prueba solemne**, de modo que **puede ser controvertido ante los Jueces del Trabajo**, sin que sea un requisito de procedibilidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez realizar el trámite ante dichas Juntas, ya que **la parte interesada puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, donde puede solicitar una nueva valoración**, para que sea el Juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión demandada; veamos:

“...la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, sean regionales o nacionales, no son pruebas solemnes, de modo que pueden ser controvertidas ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas.

(...)

Así las cosas, el ejercicio de los recursos previstos en el decreto en cita contra los dictámenes que profieren las juntas de calificación de invalidez, no es el único medio con que cuenta la parte contra la cual se pretenda hacer valer, para oponerse y disentir de su contenido, puesto que también puede controvertirlo ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, dentro del proceso, puede hacer uso de la solicitud de una nueva valoración, para que sea el juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión deprecada...”

En **Sentencia SL877 de 2020**, señaló que **los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, son prueba, no solemne**, con los cuales se puede acreditar el grado de la pérdida de capacidad laboral, su origen y fecha de estructuración, pero que al no exigir la ley determinado elemento de persuasión para acreditar la pérdida de capacidad laboral, **debe respetarse la libertad probatoria de la que están asistidos los juzgadores de instancia**; explicando que **si el Juez**, para definir una determinada controversia, **se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, podrá escoger para fundamentar su decisión, aquél que le merezca mayor credibilidad**, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste, de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

En el asunto bajo estudio, se observa que el dictamen emitido por la **Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, de fecha 3 de septiembre de 2018**, practicado como prueba de oficio decretada en Primera Instancia, **le asignó al señor Roberto de Jesús Monsalve Loaiza, el 53.41% de pérdida de capacidad laboral** (folios 133 a 136); porcentaje superior al asignado por **Colpensiones de 24.83% el 13 de septiembre de 2013** (folios 10 a 13) **y por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez de Antioquia, que fue de 39.70%**, mediante evaluaciones de fechas **28 de febrero y 4 de diciembre de 2014**, respectivamente (folios 16 a 25).

La diferencia en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral asignado, se explica por cuanto la última evaluación incluyó diagnósticos o patologías, manifestadas en forma posterior a la valoración realizada por Colpensiones y las Juntas demandadas; es así como, los dictámenes atacados versaron exclusivamente sobre el diagnóstico *“hipoacusia neurosensorial – bilateral”*, observándose que en la apelación surtida ante la Junta Nacional, el demandante afirmó que *“...mi audición es casi nula... por un oído no escucho nada y por el otro muy poco, no puedo sostener una conversación normal con nadie empiezo a perder las capacidades de habla, estas situaciones se van aumentando progresivamente, lo que me ha afectado mucho*

sicológicamente...”, anotando que tampoco se tuvo en cuenta el aspecto sicológico (folio 23); en cambio, el realizado por la U de A, incluye además de la “*hipoacusia neurosensorial*”, una “*gonartrosis primaria bilateral*” con restricción del movimiento de la rodilla y “*síndrome prostático*”; lo cual es viable, tal como lo plantea la apoderada recurrente, pues a medida que avanza la edad de la persona, pueden aparecer otras afectaciones en su estado de salud o agravarse las ya existentes, pudiendo ser objeto de nuevas valoraciones médico laborales, que eventualmente dan lugar a aumentar la pérdida de capacidad laboral o en otros casos puede disminuir, si el paciente reporta recuperación.

Lo que llama la atención de la Sala y en ello coincide con el cuestionamiento realizado por la Juez de Primera Instancia, es que el dictamen de la U de A hubiera asignado la misma fecha de estructuración de invalidez definida por Colpensiones y las Juntas de Calificación de Invalidez, esto es, el 1º de marzo de 2013, sin que en el dictamen se hubiera dado una explicación razonada y suficiente para adoptar esa decisión, teniendo en cuenta que de acuerdo a los reportes de la historia clínica o pruebas diagnósticas que sirvieron de fundamento para la calificación de la U de A, las patologías que dieron lugar al mayor porcentaje de pérdida de capacidad laboral, surgieron en fechas posteriores; véase cómo, **el dolor de rodilla izquierda tiene anotación del 15 de noviembre de 2016 de Clínica El Rosario, donde refiere que el paciente reportó 12 meses de evolución aproximadamente, sin trauma previo, lo que llevaría a noviembre del año 2015** (folio 135 vuelto); respecto a las afectaciones de la próstata, en el numeral 4. del dictamen de la U de A aparece que el afectado “*tiene problemas de la próstata*” y se registró anotación de fecha **10 de abril de 2017 de EPS SURA** donde aparece “*hipertrofia prostática benigna*” (folio 135).

Y revisada la historia clínica que viene en cuaderno anexo al expediente en 103 folios, se observa que las valoraciones médicas referentes a afecciones de la próstata datan de **noviembre y diciembre 2016, el 1º de octubre de 2016** aparece rayos X de rodillas de fecha **23 de septiembre del mismo año** donde se evidencia gonartrosis (folio 3); posteriormente, el especialista en Ortopedia de la Clínica El

Rosario en atención del 15 de noviembre de 2016, le prescribió 10 sesiones de fisioterapia y cita en tres (3) meses (folios 119 y 120).

Así las cosas, se encuentra que el Juzgado de Primera Instancia, efectuó un análisis razonado de los diferentes dictámenes periciales médico laborales aportados y practicados en el proceso, optando por mantener los efectos de los dictámenes emitidos por Colpensiones y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, por ser los que ofrecen mayor credibilidad y no encontrarse demostrado en ellos algún error; en contraste con lo anterior, se advierte incoherencia en el dictamen efectuado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, por las razones ya explicadas; siendo procedente confirmar la decisión absolutoria de Primera Instancia, incluyendo lo referente a la condena en costas.

COSTAS:

Se condena en costas en esta Segunda Instancia a cargo del demandante Roberto de Jesús Monsalve Loaiza, al no haber prosperado el recurso de apelación formulado, fijándose como agencias en derecho la suma de doscientos mil pesos (\$200.000) a favor de las entidades demandadas; de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la Sentencia de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de **apelación** se revisa, incluyendo lo referente a la condena en costas; conforme a lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

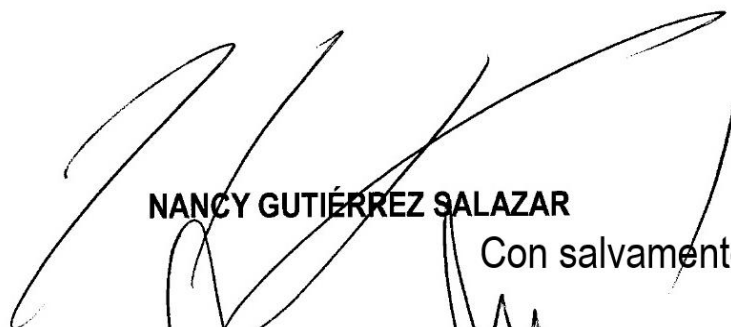
SEGUNDO: Se **CONDENA** en **Costas** en esta Segunda Instancia a cargo del demandante Roberto de Jesús Monsalve Loaiza, fijándose como agencias en derecho la suma de doscientos mil pesos (\$200.000) a favor de las entidades demandadas; según lo indicado en los considerandos.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9º del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR
Con salvamento de voto



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 190 del 10 de diciembre de 2020

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>